El delito de feminicidio en México. Tipificación y dificultades probatorias

Alicia Beatriz Azzolini Bincaz*

Resumen:

La tipificación del feminicidio ha sido cuestionada en el ámbito de la dogmática penal tradicional; sin embargo, ella ha permitido visualizar la violencia en la que viven y mueren las mujeres y ha favorecido la instrumentación de políticas públicas orientadas a su eliminación. Las dificultades probatorias de las razones de género que caracterizan al feminicidio no son insalvables; se requiere una metodología de investigación adecuada y dejar de lado las malas prácticas que descansan en prejuicios misóginos y en inercias institucionales.

Abstract:

The typification of femicide has been questioned in the field of traditional penal dogmatics; however, it has made it possible to visualize the violence in which women live and die and has favored the implementation of public policies aimed at its elimination. The probative difficulties of the gender reasons that characterize femicide are not insurmountable, an adequate research methodology is required and to put aside the bad practices that rest on misogynistic prejudices and institutional inertia.

Sumario: Introducción / I. Conceptualización del feminicidio / II. Tipificación del feminicidio en México / III. Investigación y comprobación del delito de feminicidio / IV. Reflexiones finales / Fuentes de consulta

* Profesora-Investigadora del Departamento de Derecho de la UAM-A.

Introducción

La Segunda Guerra Mundial significó un punto de inflexión en materia de derechos humanos. Es evidente que no ha sido el único evento en la historia en el que se han registrado una multiplicidad de conductas que atentan contra la dignidad humana, pero fue sin duda la primera vez que éstas quedaron registradas en imágenes y en un sinnúmero de testimonios de las propias víctimas sobrevivientes. Lo cierto es que, a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en abril de 1945, los instrumentos internacionales elaborados en su seno han permitido una mejor visualización de diferentes grupos de personas que se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad; el más extenso y el que lleva más años de existir es el de las mujeres.

Durante la segunda mitad del siglo XX se intensificaron los movimientos feministas a la vez que los instrumentos internacionales y las legislaciones nacionales —al menos en los países occidentales— reconocían expresamente los derechos de las mujeres. De esta manera el principio de igualdad ante la ley enarbolado por la Revolución francesa comenzó a aplicarse, al menos en el papel, a la mitad del género humano que había quedado excluido durante siglos del goce de ese derecho. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) de 1994 son resultado de las acciones emprendidas por organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y políticos en favor del derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades y a una vida libre de violencia.

La desigualdad de oportunidades y de desarrollo para el género femenino descansa en las normas culturales que imperan en la sociedad y en las propias leyes que con pretensiones de neutralidad están inmersas y se aplican en un contexto que dista mucho de serlo. Por ello, en los últimos años los diversos movimientos en favor de los derechos de la mujer han puesto el acento en la perspectiva de género, como metodología de análisis de la realidad y de interpretación y aplicación de las leyes. Esta perspectiva busca identificar cuál es el impacto de las características, roles y funciones de género asignadas a hombres y mujeres en las posibilidades que tienen para gozar de sus derechos y desarrollarse integralmente en igualdad de oportunidades; y cómo eso repercute en los fenómenos cotidianos, en la legislación que busca regularlos y

en las decisiones que toman los operadores jurídicos al aplicar las normas en los casos concretos.¹

La elaboración de la figura delictiva denominada feminicidio, diferente a las de los demás tipos penales de homicidio, es producto de esas corrientes del pensamiento a que se ha hecho referencia. Con ello se ha buscado visualizar la violencia en contra de las mujeres que está presente en la sociedad. El concepto de feminicidio alude al asesinato de una niña, una adolescente o una mujer adulta motivado por razones de género.² Su inclusión en los códigos penales ha suscitado controversias sobre su pertinencia y ha puesto de manifiesto las dificultades de carácter sustantivo y procesal para describir adecuadamente el evento y hacer posible su comprobación en los casos concretos.

En el presente artículo se abordará el concepto doctrinario y legal de feminicidio, su regulación en la legislación penal mexicana (federal y de la Ciudad de México) y las posibles dificultades probatorias que ha de enfrentar la autoridad investigadora. Estas reflexiones descansan en la hipótesis que los tipos penales vigentes en el ámbito federal y del fuero común de la Ciudad de México no presentan dificultades probatorias insuperables. El subregistro de feminicidios obedece a la falta de formación y capacitación y a la ausencia de análisis con perspectiva de género por parte de las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito; es frecuente el desinterés por esclarecer adecuadamente los hechos. No todos los homicidios de niñas, adolescentes y mujeres adultas se encuadran en el tipo de feminicidio, pero es necesario identificar aquellos que sí lo hacen. Esta es la única manera de dimensionar la gravedad del problema, evitar la impunidad y permitir que las víctimas secundarias accedan a la justicia.

I. Conceptualización del feminicidio

El feminicidio es una figura que ingresa al derecho penal desde las propuestas de activistas y teóricas del feminismo. Diana Russell refiere que el concepto *femicide* se utilizó por primera vez en Inglaterra en 1801 para aludir al “asesinato de una mujer”.³ Pero el término quedó en desuso, no adquirió arraigo

¹ Equis, *Metodología para el Análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la perspectiva de género*, pp. 6 y ss.

² Sela S. Bloom, *Violence against women and girls. A compendium of monitoring and evaluation indicators*, p. 178.

³ Diana E. H. Russell, “Femicide: Politicizing the killing of females”, p. 27.

en el derecho anglosajón que utiliza los conceptos de *homicide* o *murder* para aludir al homicidio doloso de cualquier persona. Los códigos penales del siglo XX inscritos en el modelo continental y los penalistas de ese signo incluyeron los conceptos de homicidio, parricidio, asesinato, infanticidio, pero no aludieron específicamente al homicidio de mujeres. La dogmática penal tradicional de raíces alemanas, que justifica la actuación penal del Estado en la protección de los bienes jurídicos más valiosos para la sociedad, ha considerado a la vida humana como uno de los bienes primarios que merecen mayor protección y ha entendido que la vida de todas personas tiene igual valor.⁴ Los dogmáticos no consideraron necesario un tipo penal específico para proteger la vida de las mujeres. Aún hoy hay quienes se resisten a la tipificación de esta conducta.

El concepto actual de feminicidio se popularizó en la década de los 70 del siglo pasado cuando los movimientos feministas reintrodujeron el término y lo politizaron para llamar la atención sobre la desigualdad de género.⁵ Fue usado públicamente por Diana Russell en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas en 1976. Posteriormente, la misma Diana Russell publicó con Jane Caputi primero y con Jill Radford después, en los años 90, libros que abordan la problemática del feminicidio. Estas autoras definen el *femicide* como el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres.⁶ En este contexto el término *femicide* se fue ampliando de homicidio misógino a todas las formas de asesinatos de personas del sexo femenino perpetrados por hombres por motivos sexuales o como expresión de una cultura patriarcal en la que manifiestan su superioridad y poder sobre las mujeres.⁷ De esta manera, el sujeto pasivo del delito incluye a niñas y adolescentes y los motivos no se agotan en la misoginia. En estos primeros desarrollos teóricos, el sujeto activo tenía la calidad específica de ser “hombre”, característica que hoy día se cuestiona, como se verá más adelante.

⁴ Claus Roxin, *Derecho Penal; Parte General*, pp. 51 y 686.

⁵ OHCHR-Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo”, citado por Celeste Saccomano, “El feminicidio en América Latina: ¿Vacío legal o déficit del Estado de Derecho?”, p. 54.

⁶ Caroll Orlok ya había utilizado el concepto de *femicide* en 1974, en un libro que no llegó a publicarse. Sobre los orígenes recientes del concepto, ver Josseline Chinchilla Santos, *et al.*, *Problemas jurídico-procesales que impiden la condena de procesados por el delito de feminicidio en El Salvador*, pp. 32 y ss.

⁷ OHCHR, *op. cit.*, p. 6.

El movimiento feminista latinoamericano retoma la línea de pensamiento trazada por las autoras mencionadas. La feminista mexicana Marcela Lagarde explica que al traducir el libro de Diana Russell y Jill Radford escogió la palabra “feminicidio” y no “femicidio” como el equivalente en español de lo que esas autoras conceptualizan como *femicide* en inglés. El “femicidio”, sostiene Lagarde, alude simplemente al homicidio de mujeres, en cambio el “feminicidio” es “una violencia ejercida por hombres contra mujeres, pero no sólo por hombres, por hombres colocados en supremacía social, sexual, jurídica, económica, política, ideológica y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explotación o de opresión y con la particularidad de la exclusión”. La categoría “exclusión” es una aportación de Lagarde, quien señala que “todas las otras formas de opresión afectan de manera diferenciada a las mujeres, de acuerdo con la región, con la clase social, con la edad, con la condición étnica, con la condición religiosa, y con otras condiciones sociales de las mujeres, y de los hombres con los que están en relación, y de las comunidades en las que están inmersas”.⁸

El desarrollo del término se ha seguido enriqueciendo en el ámbito latinoamericano con las aportaciones de Rita Segato, quien ha señalado la distinción entre feminicidios con motivaciones de orden personal o interpersonal y aquellos impersonales, “en las cuales los agresores son un colectivo organizado o, mejor dicho, son agresores porque forman parte de un colectivo o corporación y actúan mancomunadamente, y las víctimas también son víctimas porque pertenecen a un colectivo en el sentido de una categoría social, en este caso, de género”.⁹ Es así que en América Latina las feministas identifican cuatro subcategorías principales del fenómeno: feminicidio íntimo, feminicidio no íntimo, feminicidio por conexión y feminicidio sexual. El *feminicidio íntimo* es aquel cometido por un hombre con el cual la víctima tenía o solía tener una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines. El *feminicidio no íntimo* incluye aquellos cometidos por un hombre que no tenía ninguna relación íntima, familiar o de convivencia con la víctima; el asesino puede ser un amigo, un conocido o un extraño, y la violación sexual a menudo concurre con este tipo de feminicidio. Entran en esta categoría los feminicidios impersonales descritos por Segato. El *feminicidio por conexión* recoge el asesinato

⁸ Marcela Lagarde, “Del femicidio al feminicidio”, p. 221.

⁹ Rita Segato, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”. Ver también Cristiane Brandão Augusto, “Feminicidio en el sistema penal brasileño”.

de cualquier mujer que trató de intervenir o quedó atrapada en una acción de feminicidio. Los *feminicidios sexuales* son los asesinatos precedidos de tortura y abuso sexual.¹⁰

El feminicidio así definido adquiere su propia identidad frente al homicidio. No se trata únicamente de la privación de la vida, sino que refiere a un sujeto activo que, como se verá, no ha de ser necesariamente un hombre, a un sujeto pasivo que ha de ser una persona del género femenino, aunque no sea biológicamente mujer, y a intencionalidades y situaciones específicas que acompañan a la realización de la conducta.

La amplia acogida que tuvo el concepto en el ámbito latinoamericano se explica porque en la región la violencia contra las mujeres es generalizada y la impunidad es la regla. Su recepción no se limitó a los círculos feministas, sino que la figura del feminicidio fue incluida en los códigos penales. El tema tuvo un gran impulso a partir de los sucesivos homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dio lugar en 2009 a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como “Campo Algodonero” en la que se condenó al Estado mexicano por violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las mujeres víctimas e incumplir con su deber de investigar las violaciones a esos derechos. El caso de las llamadas “muertas de Juárez” se difundió internacionalmente y favoreció que el feminicidio saliera del ámbito feminista y pasara a formar parte de las agendas políticas de los países de América Latina.

En 2007 se promulgó en México la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define en su artículo 21 la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. Este fue el primer paso para reconocer la figura de feminicidio; no se trató de una legislación propiamente penal, pero sirvió de antesala a la criminalización de esta conducta. A partir de ese reconocimiento, varios países de la región, entre ellos México, incorporaron el delito de feminicidio en sus códigos penales: Argentina (2012); Bolivia (2013);

¹⁰ Celeste Saccomano, “El feminicidio en América Latina: ¿Vacío legal o déficit del Estado de Derecho?”, pp. 55-56.

Brasil (2015); Chile (2010); Colombia (2008); Costa Rica (2007); El Salvador (2010); Ecuador (2014); Honduras (2013); Guatemala (2008); México (2011 en CPDF y 2012 en CPF); Nicaragua (2012); Panamá (2013); Perú (2013), y Venezuela (2014).¹¹

La manera en que los códigos penales latinoamericanos han regulado el feminicidio varía de país en país. En algunos casos, se ha previsto como una agravante del homicidio (en Argentina); en otros, como un tipo penal autónomo (México). A su vez, algunos países exigen un componente psicológico específico (Nicaragua), mientras que en otros se hace referencia a motivaciones internas, pero se señalan circunstancias objetivas que facilitan o al menos acotan la tarea probatoria.¹² Las disposiciones penales específicas de cada país para el feminicidio constituyen un límite infranqueable a la luz del principio *nullum crimen*. Para resolver los casos concretos, habrá que atenerse a las disposiciones expresas de la ley, con independencia de los desarrollos que la doctrina feminista ha alcanzado respecto del tema. Los avances doctrinarios han influido ciertamente en la elaboración de las normas penales y contienen directrices que orientan en la aplicación de la ley al caso concreto, pero no la suplen. Por ello es importante una buena técnica legislativa que permita, por un lado, identificar los casos que se han concebido teóricamente como feminicidio y, por el otro, dejar fuera aquellos homicidios de personas del género femenino que no corresponden a esos estándares. Una buena técnica legislativa facilitará la tarea de las personas encargadas de investigar y de comprobar la existencia de este delito.

II. Tipificación del feminicidio en México

El tipo penal de feminicidio ingresó al Código Penal para el Distrito Federal (CPDF) en julio de 2011, y fue modificado en agosto de 2019. A su vez, la figura es incorporada en el artículo 325 del Código Penal Federal (CPF) en junio de 2012.

La tipificación del feminicidio tuvo lugar en medio de discusiones teóricas e ideológicas de distinto signo y se desarrolló en diversos niveles. Los penalis-

¹¹ Ela Wiecko *et al.*, “Processo penal e gênero: a devida diligencia da Convenção de Belém do Pará e o protocolo de investigação de feminicídios no Distrito Federal do Brasil”, p. 71.

¹² Carmen Vázquez, “Técnica legislativa del feminicidio y sus problemas probatorios”.

tas dogmáticos rechazaban un tipo penal que, en definitiva, protege la vida de las mujeres, bien jurídico que goza de amplia protección ante diversas formas de ataque. Argumentaron, también, que la vida es igualmente valiosa para cualquier ser humano, se trate de hombres o mujeres, niños o ancianos. En igual sentido, se expresaba la mayoría de los operadores del sistema penal, sin una reflexión fundada en los principios del sistema, pero sí en la experiencia y en el sentido común que les permitía intuir que no había diferencia entre las vidas humanas, además de que a los hombres los matan más que a las mujeres. Se argumentó que con este tipo penal se violaba el principio de igualdad ante la ley, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado que la figura no vulnera el principio de igualdad, que ella “responde a una finalidad constitucional, pues busca lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, en especial, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia”. Estas conductas, siguió diciendo el alto tribunal,

“(..). afectan no sólo la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual, sino que también son cometidas con base en la discriminación y subordinación implícita contra las mujeres, es decir, por razones de género; de ahí que el citado precepto legal constituye una medida objetiva y racional, ya que se garantiza la equidad al establecer mecanismos de protección a la integridad de las mujeres que han sufrido violencia”.¹³

Esta decisión, a pesar de tratarse de una tesis aislada, ha impactado y ha sido aplicada por tribunales inferiores. La decisión contiene razones de peso para superar el argumento de que la tipificación del feminicidio transgrede el principio de igualdad. La figura no hace más que atender a una desigualdad que está presente en la realidad cotidiana.

El feminicidio ha sido legislado en el CPF y en el CPDF en un capítulo aparte del homicidio, dentro del Título Delitos contra la vida y la integridad corporal. Es tratado como un tipo especial, autónomo del homicidio, no se le aplican las atenuantes ni las agravantes de éste. Es considerado un tipo dolo-

¹³ FEMINICIDIO. EL ARTÍCULO 153-A DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO POR CUESTIONES DE GÉNERO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 28, marzo de 2016; Tomo I; Pág. 979. 1a. LIV/2016 (10a.). Registro No. 2 011 230.

so, no admite la comisión culposa: el sujeto activo ha de conocer y querer o, al menos, aceptar privar de la vida a una mujer por razones de género. Esto se corrobora en el hecho que los códigos mencionados no incluyen el feminicidio en el listado de tipos culposos (artículo 60 del CPF y artículo 76 del CPDF). Existen tesis jurisprudenciales que soportan las afirmaciones anteriores.

La ley no menciona que el sujeto activo haya de ser un hombre; sin embargo, tal como se ha visto, el desarrollo doctrinario sí lo hace. Esto ha hecho que algunos jueces se hayan pronunciado en este sentido. En efecto, el feminicidio ha sido considerado como la expresión extrema del poder masculino sobre la mujer, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. Sin embargo, el legislador penal federal y el de la Ciudad de México han dejado la puerta abierta a la regla general; nada impide pensar en un caso en que existan razones de género en el actuar de una mujer hacia otra. Ha de entenderse que el concepto “mujer”, también podría dar lugar a precisiones para determinar si incluye a personas que nacieron hombres y se sometieron a cambio de sexo, a personas que están en el periodo de transición previo a la intervención quirúrgica para mudar de sexo, a personas que sin haberse sometido a una intervención se sienten y viven como mujeres a pesar de mantener una conformación biológica masculina. Esta situación que ha dado lugar a conceptos como “travesticidio” y “transfemicidio” (transfeminicidio sería en México), no puede quedar ajena a la reflexión acerca de los alcances del tipo penal de feminicidio.¹⁴ Todo lleva a pensar que, más allá del sexo biológico tanto el sujeto activo como el pasivo han de concebirse con perspectiva de género; sujeto activo podrá ser un hombre o una mujer y sujeto pasivo una mujer, aunque su sexo biológico original no sea el femenino, si al momento de la conducta puede ser considerada socialmente como mujer.

El Código Penal Federal y el de la Ciudad de México establecen que comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. La conducta típica es el privar de la vida; ella ha de estar motivada por razones de género. En este punto, existen interpretaciones erróneas: se dice que la única conducta típica no se agota en la privación de la vida, que el delito no se consuma en algunos supuestos con la privación de la vida sino con actos posteriores como la exposición del cadáver. No debe confundirse

¹⁴ Radi Blas y Alejandra Sardá-Chandiramani, “Travesticidio/transfemicidio: Coordenadas para pensar los crímenes de travestis y mujeres trans en Argentina”.

la conducta típica con los supuestos señalados por el legislador para acreditar las razones de género.¹⁵ Se trata, sin duda, de un tipo complejo en el que se protege más de un bien jurídico, la vida: el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el derecho de la mujer al respeto a su dignidad y a sostener relaciones igualitarias. Pero no ha de confundirse la conducta que conforma el núcleo típico con las circunstancias previstas para acreditar las razones de género. Tampoco han de confundirse las razones de género con las circunstancias señaladas por el legislador para acreditarlas. La exposición del cadáver no es una razón de género; son las razones de género que motivaron y acompañaron a la privación de la vida las que se expresan a través de la exhibición pública del cadáver.

Las “razones de género” marcan la diferencia entre el homicidio, en todas sus variantes, y el feminicidio. Por razones de género ha de entenderse la voluntad dirigida a privar de la vida a la víctima por ser mujer, por su calidad de ser inferior, despreciable, por todo lo negativo que para el sujeto activo comprende el “ser mujer”. El protocolo latinoamericano para la investigación del feminicidio establece que:

Los factores que hacen diferente el delito de femicidio con el homicidio de un hombre, e incluso con el homicidio común de una mujer, destacan que, a través de la muerte violenta, se pretender refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer: subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, femineidad, etcétera. Esto significa que el agente feminicida o sus actos reúne alguno o algunos patrones culturales arraigados en ideas misóginas de superioridad del hombre, de discriminación contra la mujer y de desprecio contra ella y su vida. Tales elementos culturales y su sistema de creencias le hacen creer que tiene el poder suficiente para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para castigarlas o sancionarlas, y en última instancia, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. Esos mismos elementos

¹⁵ Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, *Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2011*. En este documento se señala que el delito de feminicidio se consuma cuando el cuerpo es expuesto o cuando se le hayan infligido a la mujer lesiones posteriores a la muerte. No coincido con ese criterio: la prescripción comienza a correr desde la privación de la vida, las demás conductas son a efecto de acreditar las razones de género, pero no para consumir el feminicidio.

culturales permiten que el victimario se vea reforzado como hombre a través de la conducta realizada.¹⁶

Estas razones de género incluidas por los legisladores federal y de la Ciudad de México son el marco de referencia para delimitar en los casos concretos si se trata de un feminicidio o de un homicidio. Por tratarse de un sentimiento, de un aspecto subjetivo difícil de acreditar y de valorar, los legisladores mencionados decidieron enumerar taxativamente circunstancias que permiten acreditar esas razones. Si no concurre alguna de esas circunstancias no se configurará el feminicidio, aunque hubiera otros medios de prueba o la confesión indubitable del autor que su conducta fue motivada por razones de género. Esta es una técnica legislativa desafortunada porque al limitar a las razones de género a los supuestos expresamente señalados se corre el riesgo de infrainclusión y suprainclusión de casos.¹⁷

Las circunstancias que se enumeran en el CPDF y en el CPF para establecer las razones de género son similares. Ambos códigos enuncian las situaciones que dan lugar a que la muerte de la mujer se considere por razones de género como son que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia; que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Hay supuestos que se superponen, como que “haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza” y “el que exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o de amistad, subordinación o superioridad”. En el afán de abarcar todos los casos posibles, se mencionan situaciones que no pueden estar la una sin la otra, como la amistad y la confianza.

Es común que estos supuestos se apliquen sin más; esto es, sin reflexionar sobre las razones de género que han de estar presentes en todos los casos. Es suficiente con que se acredite una de las fracciones previstas por el artículo 148 bis del CPDF o del artículo 325 del CPF para que se considere la privación

¹⁶ ACNUDH, *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*, p. 35.

¹⁷ Carmen Vázquez, *op. cit.*, p. 217.

de la vida como feminicidio. Esto puede llevar a la suprainclusión de casos. Así, por ejemplo, todos los homicidios de mujeres en el ámbito familiar serán feminicidio y nunca homicidio en relación del parentesco, aunque se trate de un hijo que por robar a sus padres mate a ambos. Lo mismo en el caso que alguien prive de la vida a un matrimonio de un hombre y una mujer para robarles el auto en el que están circulando y arroje los cuerpos en la vía pública; la muerte del hombre sería un homicidio calificado y la de la mujer feminicidio. Considero que esta interpretación es errónea: nunca deben perderse de vista “las razones de género”, que constituyen el *ethos* del feminicidio. En el mismo sentido, es común que el crimen organizado exponga en lugar público el cuerpo sin vida de los integrantes de la banda rival o de aquellos que han sido considerados traidores: si se trata de una víctima masculina, el hecho se tipificará como homicidio probablemente calificado, si es una víctima femenina sería feminicidio. Esta situación así descrita no tiene sentido, pero es consecuencia de la técnica legislativa que se ha escogido para tipificar el feminicidio.¹⁸

Es probable que en algunas situaciones nos encontremos ante un concurso aparente de normas previsto en el artículo 13 del CPDF, entre homicidio simple o calificado y feminicidio. Habrá que dilucidar en cada caso si la conducta ha sido motivada por razones de género. Ello permitirá aplicar los principios de especialidad, consunción o subsidiariedad para encuadrar el evento.

Una mención especial merece el homicidio calificado por motivos de odio previsto en el artículo 138 fracción VIII del CPDF.¹⁹ Este precepto fue incluido en el CPDF en septiembre de 2009, dos años antes de que se tipificara el feminicidio.²⁰ La citada fracción abarca, en estricto sentido formal, todos los casos de feminicidio; el precepto considera, por ejemplo, como motivo de odio la identidad de género. Sin embargo, además de la dificultad de probar estos motivos en cada caso, la descripción legal no cuenta con los antecedentes doctrinarios y el debate previo que han sustentado la figura del feminicidio. El artículo 138 fracción VIII no alcanza a comprender esas “razones de

¹⁸ *Ibidem.*, p. 203.

¹⁹ 138 fracción VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.

²⁰ El decreto por el cual se incluyó el homicidio calificado por razones de odio se publicó en la *Gaceta Oficial de Distrito Federal* el 10 de septiembre de 2009.

género” propias del feminicidio sustentadas en la cultura patriarcal que exige subordinación del género femenino al masculino. Y, sobre todo, no parece suficiente para visibilizar la violencia sistemática hacia las mujeres. Este tipo de homicidio calificado quedará reservado, en todo caso, para aquellos casos que no se configuren como feminicidio, pero en los que sí se acrediten los motivos de odio en la muerte de una mujer.

Las punibilidades para el feminicidio son altas. El CPF prevé para el feminicidio una punibilidad de 40 a 60 años de prisión, la cual es superior a la del homicidio calificado que es de 30 a 60 años de prisión. El CPDF contempló, en un primer momento, una punibilidad de 20 a 50 años de prisión, similar a la prevista para el homicidio calificado; en agosto de 2019 se hicieron algunas modificaciones al tipo penal y la punibilidad se incrementó a 35 a 70 años de prisión. La gravedad de las sanciones y la trascendencia del bien jurídico afectado hacen necesaria la actuación eficiente y eficaz de los operadores del sistema penal involucrados en la investigación, persecución y juzgamiento de este delito. Nada justifica punibilidades tan altas, pero ellas son la regla en nuestro sistema penal. Nuestros legisladores parecen querer compensar la impunidad que prevalece en la mayoría de los delitos con conminaciones de sanciones extremadamente severas, desproporcionadas según estándares de un derecho penal democrático. En este caso se ha privilegiado la vulnerabilidad de las víctimas sobre valor el bien jurídico para establecer la punibilidad legal.

III. Investigación y comprobación del delito de feminicidio

Los legisladores federales y locales han enumerado circunstancias objetivas con las cuales se acreditan las razones de género. Estas circunstancias son similares en uno y otro código. El CPDF incluye un supuesto más, incorporado recientemente, que elude a que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión.

Es suficiente en el caso concreto que se compruebe alguno de los supuestos para acreditar el delito de feminicidio, siempre que no existan datos que indiquen de manera relevante que los motivos no fueron relacionados con el género. Siempre que se comprueben algunos de los supuestos, se presume el feminicidio salvo datos contundentes que excluyan las razones de género.

Las fracciones tienen distintas dificultades probatorias, mientras que las relaciones familiares o laborales pueden ser más fáciles de probar; la violencia sexual no siempre lo es, ya que este tipo de violencia no conlleva necesariamente huellas físicas. La acreditación del feminicidio exige que los operadores encargados de investigar delitos en todos los casos en que se enfrente la muerte de una mujer en la que haya indicios que la misma fue provocada dolosamente se aboquen a recabar todas las evidencias necesarias para comprobar o descartar el feminicidio. Debe partirse de la presunción de feminicidio, la cual admite prueba en contrario.

Específicamente, se presume, salvo prueba contundente en contrario, que existen razones de género en el homicidio de una mujer en el CPF y en el CP-DF cuando:

- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo: Este supuesto, descrito en ambos códigos, presenta dificultades probatorias primero porque no siempre la violencia sexual deja huellas, piénsese en casos de violencia moral, y segundo, porque es necesario identificar cuando haya huellas de violencia que ésta es de carácter sexual. Los signos de violencia han de estar en el cuerpo de la víctima.²¹ Las dificultades para identificar la violencia sexual han sido abordadas en los protocolos para la investigación del feminicidio e incluso en una tesis de la SCJN. Se señala que la violencia sexual puede expresarse de distintas maneras, el cuerpo de la mujer presentará signos e indicios derivados de las fantasías que forman parte de la motivación del autor. Ello no es obstáculo para identificar como signos recurrentes de violencia sexual lesiones en la parte exterior del cuerpo como mordeduras de mamas y/o contusiones al interior de los muslos.²²

²¹ Carmen Vázquez hace una reflexión que a mi parecer excede el texto de la norma. No se requiere que se haya comprobado el delito contra la libertad sexual. No hay una correlación necesaria entre violencia sexual y acreditación de un delito contra la libertad sexual. Hay delitos como contra la libertad sexual como el hostigamiento que pueden quedar comprendidos en algún otro de los supuestos de razones de género contemplados en los códigos. Ver Carmen Vázquez, *op. cit.*, pp. 204-205.

²² ACNUDH y ONU Mujeres, *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*, p. 81. Y SCJN FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Registro No. 2 009 087 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, mayo de 2015; Tomo I; Pág. 439. 1a. CLXI/2015 (10a.).

- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Al respecto se ha señalado que el uso del plural, que comparte con el caso anterior, es una limitante, ya que si hubiera sólo una lesión no sería considerado como feminicidio.²³ Esta interpretación es demasiado estricta, teniendo en cuenta que de lo que se trata es que se comprueben razones de género. No ha de perderse de vista que cada una de las fracciones tiene por finalidad acreditar esas razones, lo cual de por sí presenta dificultades probatorias importantes. Por ello, si existe una lesión con características tales que connote dichas razones de género, será suficiente para sustentarlas. Los protocolos sobre feminicidio suelen ejemplificar el tipo de lesiones que son infligidas recurrentemente por los agentes feminicidas.
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Este supuesto, contemplado en el CPF, admite cualquier medio de prueba que dé cuenta de la violencia anterior hacia la víctima por parte de quien es considerado como sujeto activo de la privación de la vida. El legislador de la Ciudad de México menciona antecedentes de acoso o amenazas del sujeto activo hacia la víctima, pero, finalmente, refiere cualquier tipo de violencia; los casos específicos son meramente ejemplificativos. El acoso finalmente es un tipo de violencia moral. Estas precisiones y reiteraciones de términos obedecen a que en la práctica forense se abusa de la interpretación literal y formal de los preceptos, dejando de lado toda consideración sobre los principios y las reglas que rigen la interpretación de las normas; principios y reglas que aplicados adecuadamente no violan el principio *nullum crimen* propio del derecho penal garantista.
- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, señala el CPF. El código local agrega a las anteriores las relaciones de carácter laboral y docente. La sola comprobación de alguna de estas relaciones permite presumir la existencia de razones de género, pero esta presunción puede ser desvirtuada en el caso concreto. Habrá situaciones en que la privación de la vida de la mujer dentro de este tipo de relación obedezca a razones diversas al género, ello excluiría el feminicidio.

²³ Elizabeth V. Leyva, “El (mal) diseño del feminicidio en México”.

- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Esta hipótesis que en el CPF aparece como una fracción independiente, en el CPDF, como ya se vio, está contenida en la que refiere antecedentes de cualquier tipo de violencia cometida por parte del sujeto activo contra la víctima. Es un ejemplo de la superposición de causales que obedece al afán de abarcar todos los casos posibles en que se expresen las razones de género.
- El CPDF contempla que “Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o de amistad, subordinación o superioridad”. Resulta innecesaria la referencia a tantas clases de relaciones, varias de ellas señaladas en hipótesis anteriores. Descripciones tan específicas pueden extenderse *ad infinitum*; siempre es posible imaginar alguna relación en particular, pero ello carece de sentido y propicia que se apliquen cada vez criterios más rígidos para interpretar cada caso. Esto pone en evidencia una mala técnica legislativa.²⁴
- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Este supuesto está regulado en ambos códigos y se sustenta en que la incomunicación coloca a la víctima en estado de indefensión: La incomunicación está asociada en muchas ocasiones con la privación de la libertad de la víctima como secuestro o desapariciones forzadas y se reconoce como una expresión de violencia de género.²⁵
- El CPF refiere que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. El CPDF amplía esta hipótesis e incluye que el cuerpo sea depositado o arrojado. Esta situación ha de valorarse en cada caso. Se sabe que la delincuencia organizada exhibe o deposita los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos, como ya se ha mencionado, sin que ello implique necesariamente una razón de género.²⁶
- La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir

²⁴ Carmen Vázquez, *op. cit.*, p. 204.

²⁵ OACNUDH, *op. cit.*, p. 73.

²⁶ Carmen Vázquez, *op. cit.*, p. 205.

auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar auxilio. Este supuesto se incorporó en el CPDF para ampliar las situaciones que presuponen razones de género y facilitar su comprobación. En principio el estado de indefensión está abarcado por el homicidio calificado por la ventaja; para configurar el feminicidio se requiere la situación de dominación del sujeto activo que se aprovecha de la desprotección e indefensión de la víctima a quien priva de la vida por su condición de ser mujer.

Las hipótesis contempladas en la ley son diversas y facilitan la comprobación de las razones de género necesarias para acreditar el feminicidio. Pero, a pesar de que los legisladores han ampliado los supuestos que generan la presunción de razones de género que han de acompañar a la privación de la vida de la mujer, los colectivos de mujeres y los familiares de las mujeres víctimas de homicidio se han quejado en reiteradas ocasiones y por diversos medios de que las autoridades encargadas de investigar estos delitos no identifican los casos de feminicidio, sino que los tipifican como homicidios simples, calificados o culposos o como suicidios. La SCJN, atendiendo esos reclamos, ha señalado que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, atendiendo a los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, los órganos investigadores deben actuar con perspectiva de género, “para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género”. Dice el alto tribunal que toda investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.²⁷ Esta última afirmación impacta en uno de los graves problemas de nuestras autoridades encargadas de la investigación de los delitos: una actuación orientada a cumplir con las formalidades más que a esclarecer los hechos.

La SCJN, atendiendo a esas conocidas malas prácticas en la investigación de delitos en México, ha sido más específica y ha señalado las diligencias que se deben llevar a cabo para investigar la muerte violenta de una mujer. La tesis al respecto es muy completa y merece su transcripción:

²⁷ FEMINICIDIO.LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Registro No. 2 009 087 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, mayo de 2015; Tomo I; Pág. 439. 1a. CLXI/2015 (10a.).

Cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso (identificación de la víctima, protección de la escena del crimen, recuperación y preservación del material probatorio, investigación exhaustiva de la escena del crimen, identificación de posibles testigos y obtención de declaraciones, realización de autopsias por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, y determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte), las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Además, las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos feminicidios deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del caso basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes. En ese sentido, se debe investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que se da en una región determinada. En específico, los protocolos de investigación de muertes de mujeres incluyen diversos peritajes específicos, entre los que destacan los tendientes a determinar si el cuerpo tenía alguna muestra de violencia y, específicamente, violencia sexual —para lo cual se tienen que preservar evidencias al respecto—. La exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, pues es difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las primeras horas. Además, siempre deben buscarse signos de defensa y lucha, preponderantemente en los bordes cubitales de manos y antebrazos, uñas, etcétera. En homicidios de mujeres relacionados con agresiones sexuales suelen encontrarse, en la parte exterior del cuerpo, entre otros, mordeduras de mamas y/o contusiones al interior de los mus-

los. Además, los peritajes en medicina forense tienen el propósito de determinar si la occisa presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte. Aunado a lo anterior, algunas diligencias específicas en este tipo de muertes consisten, por un lado, en que el perito que realiza la autopsia esté familiarizado con los tipos de tortura o de violencia que predominan en ese país o localidad y, por otro, que además de la necropsia psicológica practicada a las occisas, se realice complementariamente un peritaje psicosocial, el cual se centra en la experiencia de las personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, mediante el cual se analice su entorno psicosocial.²⁸

El detalle con el que la SCJN describe las diligencias que deben llevarse a cabo, pone en evidencia la necesidad de capacitar y sensibilizar debidamente a los operadores sobre la realidad de violencia que acompaña a la vida y a la muerte de muchas de las mujeres en México. Esta resolución tiene como antecedente los aspectos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como “Campo Algodonero”.²⁹ La SCJN pone el acento en las razones de género y se detiene en la comprobación de la violencia sexual que, como se mencionó oportunamente, presenta dificultades para su acreditación. El señalamiento de peritajes en medicina forense y en aspectos psicosociales representa una alternativa para superar esos obstáculos.

²⁸ FEMINICIDIO. DILIGENCIAS QUE LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU INVESTIGACIÓN. Registro No. 2 009 086 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, mayo de 2015; Tomo I; Pág. 437. 1a. CLXII/2015 (10a.)

²⁹ El contenido de esta sentencia es citado en el *Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el delito de feminicidio* elaborado por la Procuraduría General de la República en México. Se menciona que la Corte Interamericana estableció que la eficiente determinación de buscar la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad.

Asimismo, se transcriben los principios rectores que han de guiar la investigación de la muerte violenta de una mujer. Ellos son: I. Identificar a la víctima; II. Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación penal de los responsables; III. Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; IV. Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que la pueda haber causado; V. Distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; VI. Investigar exhaustivamente la escena del crimen; y VII. Realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. *Cfr.* Procuraduría General de la República, *Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio*.

En atención a las dificultades probatorias del feminicidio y a la falta de sensibilidad y de capacitación de muchos operadores del sistema penal en esta materia, se han emitido diferentes protocolos por instancias nacionales e internacionales con la finalidad de guiar y facilitar la actuación de los órganos de procuración y administración de justicia. Son representativos el *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) y por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), y, en el ámbito nacional, el *Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el delito de feminicidio*, elaborado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El modelo de protocolo latinoamericano propone un plan metodológico para la investigación del feminicidio que aborde el componente fáctico, jurídico y probatorio en cada caso. El objetivo es demostrar, más allá de toda duda razonable, que se cometió femicidio; es decir la privación de la vida de una mujer por razones de género e identificar a los responsables (autor(es) y partícipe(s)). Para ello sugiere un conjunto de preguntas que han de guiar la investigación y los diferentes aspectos que han de ser tenidos en cuenta para identificar las razones de género. Se detiene especialmente en los signos e indicios relacionados con los diferentes tipos de feminicidio, como el sexual y el íntimo, y en la actuación del médico forense y en el análisis criminalístico. El protocolo elaborado por la PGR se adapta al modelo latinoamericano; aborda los componentes fáctico, jurídico y probatorio e identifica las actuaciones necesarias por parte de la policía de investigación, de los agentes del Ministerio Público y de los peritos. Ambos protocolos señalan el enfoque de género como punto de partida para investigar la muerte violenta o sospechosa (casos de aparente suicidio o accidente) de una mujer.

La SCJN, a su vez, ha emitido un Protocolo para juzgar con perspectiva de género, que si bien no aborda el tema de feminicidio sí se ocupa de la violencia sexual y menciona la sentencia de “Campo Algodonero” para evidenciar los prejuicios imperantes en la investigación de la desaparición y muerte de mujeres que obstaculizaron el acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas.³⁰ Precisamente, esos prejuicios imperantes acompañan a las malas

³⁰ SCJN, *Protocolo con perspectiva de género; Haciendo realidad el derecho a la igualdad*, en particular, ver pp. 91 a 93 y 121 a 122.

prácticas que están enraizadas en la actuación de muchos de los encargados de la investigación de los delitos.

La perspectiva de género, que ha de estar presente en la investigación de la muerte violenta o sospechosa de una mujer, obliga al investigador a analizar todos los indicios y aspectos que sugieran razones de género en la comisión del delito. Han de identificarse e investigarse hasta agotar los supuestos contemplados en la ley. Lamentablemente, entre las malas prácticas que acompañan a la investigación del delito en la Ciudad de México, por ejemplo, destaca la falta de presencia del médico legista en el lugar del hallazgo del cadáver. La presencia del médico es muy importante porque le permite, entre otras cosas, realizar el diagnóstico de muerte real, identificar si el cadáver fue movido o se encuentra en su posición original, elaborar una valoración preliminar de la causa de muerte, recoger los indicios del cadáver y darles una debida protección durante el traslado, iniciando la cadena de custodia. La falta de presencia del médico legista en el lugar de los hechos dificulta la comprobación de los supuestos de violencia sexual o de otro tipo de violencia de género.

La investigación de las muertes violentas o sospechosas de mujeres ha de seguir un plan de trabajo que permita organizar y explicar las actuaciones para identificar y asegurar los medios cognoscitivos, elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para demostrar, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de un feminicidio.³¹ La autoridad investigadora debe actuar con la objetividad y el rigor necesarios para identificar las muertes de mujeres que son feminicidio de aquellas que no lo son, sorteando las dificultades probatorias y aplicando en todo momento la perspectiva de género.

IV. Reflexiones finales

No está de más retomar lo dicho al inicio de este documento: hay una historia de invisibilidad de la violencia contra la mujer que es expresión de una cultura patriarcal en la que los hombres ocupan un lugar jerárquicamente superior al de las mujeres. Esta cultura, que permea en la manera en que las personas perciben el mundo y analizan los hechos, está presente con frecuencia en quienes investigan los delitos. Ha sido necesaria la presión de grupos feministas y

³¹ ACNUDH y ONU Mujeres, *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*.

organismos de derechos humanos para impulsar la inclusión de la norma de feminicidio en los códigos penales y sigue siendo esa misma presión la que obliga a los operadores del sistema a investigar los casos concretos.

Los códigos penales federal y de la Ciudad de México han definido el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género. Para facilitar la comprobación del delito se enumeran las hipótesis que constituyen razones de género. Esta enumeración taxativa conlleva el riesgo de infra o suprainclusión de casos. Algunas de las hipótesis presentan dificultades probatorias como la violencia sexual y otras son tan fácilmente acreditables que pueden incluir supuestos ajenos a las razones de género. A pesar de la acreditación formal de los supuestos considerados como razones de género por el tipo penal, es posible que en un caso concreto no se configure el feminicidio cuando hay datos evidentes de que la privación de la vida no fue motivada por razones de género.

La tipificación del feminicidio cumple la función de visualizar la violencia de género, propiciar el castigo de los culpables y proporcionar a las víctimas el acceso a la justicia. Es indudable que la actuación eficiente y eficaz de las personas operadoras del sistema penal para investigar y, en su caso, castigar los feminicidios es necesaria para satisfacer el acceso a la justicia de las víctimas y de la sociedad. Abatir la impunidad es un medio idóneo para prevenir el delito. Sin embargo, debe tenerse presente que la creación de la norma penal, la gravedad de la pena prevista y la actuación eficiente y eficaz del sistema no son suficientes para la protección de las mujeres. El derecho penal no es el medio idóneo para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, aunque su aplicación sea necesaria e inevitable. No debe apostarse por la solución penal. Se requieren políticas públicas dirigidas a concientizar y educar a la sociedad con perspectiva de género: que haya albergues para las mujeres víctimas de violencia, guarderías para que puedan trabajar y ser económicamente independientes. Mujeres independientes, autónomas, capaces de desarrollarse y relacionarse en situación de igualdad con todas las personas estarán en mejor situación de prevenir y evitar la violencia.

Fuentes de consulta

Bibliográficas

- Equis. *Metodología para el Análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la Perspectiva de Género*. México, 2017.
- Roxin, Claus. *Derecho Penal; Parte General*. Tomo I, Civitas, Madrid, 1997.
- Wiecko, Ela *et al.* “Proceso penal e gênero: a devida diligencia da Convenção de Belém do Pará e o protocolo de investigação de feminicídios no Distrito Federal do Brasil”. *Violencia feminicida y feminicidios en México y Brasil*, Ricardo Rodríguez Luna *et al.*, México, Tirant lo Blanch, 2019.

Electrónicas

- ACNUDH y ONU Mujeres. *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf> (consultado el 30 de junio de 2020).
- Blas, Radi y Alejandra Sardá-Chandiramani. “Travesticidio / transfemicidio: Coordinadas para pensar los crímenes de travestis y mujeres trans en Argentina”. *Publicación en el Boletín del Observatorio de Género*, 2016. <https://www.aacademica.org/blas.radi/14> (11/10/2022).
- Bloom, Sela S. *Violence against women and girls. A compendium of monitoring and evaluation indicators*. Carolina del Norte, USAID, 2008. <https://gsdrc.org/document-library/violence-against-women-and-girls-a-compendium-of-monitoring-and-evaluation-indicators/> (consultada el 11 de junio de 2020).
- Brandão Augusto, Cristiane. “Feminicidio en el sistema penal brasileño”. *Revista del posgrado en derecho de la UNAM*, Núm. 9, Nueva época, julio-diciembre 2018. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-posgrado-derecho/article/viewFile/35793/32722> (consultado el 18 de junio de 2020).
- Chinchilla Santos, Josseline *et al.* *Problemas juridico-procesales que impiden la condena de procesados por el delito de feminicidio en El Salvador*. El Salvador, Universidad de El Salvador, 2016, (Tesis para obtener el grado de licenciada). <http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/13090/1/PROBLEMAS%20JURIDICO-PROCESALES%20QUE%20IMPIDEN%20LA%20CONDENA%20DE%20PROCESADOS%20POR%20EL%20DELITO%20DE%20FEMINICIDIO%20E.pdf> (30 de junio de 2020).
- Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. *Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2011*. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/DF/df_meta1_4_2011.pdf (consultado el 23 de junio de 2011).
- Lagarde, Marcela. “Del femicidio al feminicidio”. *Desde el jardín de Freud*, Núm. 6, Bogotá, Universidad de Colombia, 2006, pp. 216-225. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343/8987>
- Leyva, Elizabeth V. “El (mal) diseño del feminicidio en México”. *Derecho en Acción*, CIDE, 25 de enero de 2017. <http://derechoenaccion.cide.edu/el-mal-diseno-del-feminicidio-en-mexico/> (consultado el 30 de mayo de 2020).

- OHCHR-Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo”. UN, A/HRC/20/16 (23 de mayo de 2012). http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.HRC.20.16_En.pdf (consultado el 18 de junio de 2020).
- Procuraduría General de la República. *Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Femicidio*. México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/Protocolo_Femicidio.pdf (consultado el 30 de junio de 2020).
- Russell, Diana E. H. “Femicide: Politicizing the killing of females”. VV.AA. *Strengthening understanding of femicide*. Washington, D.C. PATH, MRC y WHO, 2008, https://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf (consultado el 17 de junio de 2020).
- Segato, Rita. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”. *Sociedade e Estado*, Núm. 2, Vol. 29, maio/agosto 2014, Universidade de Brasília. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000200003 (consultado el 18 de junio de 2020).
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Protocolo con perspectiva de género; Haciendo realidad el derecho a la igualdad*. 2013. http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf (consultado el 30 de junio de 2020).
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, FEMINICIDIO. DILIGENCIAS QUE LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU INVESTIGACIÓN. Registro No. 2 009 086 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, mayo de 2015; Tomo I; Pág. 437. 1a. CLXII/2015 (10a.).
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Registro No. 2 009 087 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, mayo de 2015; Tomo I; Pág. 439. 1a. CLXI/2015 (10a.).
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, FEMINICIDIO. EL ARTÍCULO 153-A DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO POR CUESTIONES DE GÉNERO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 28, marzo de 2016; Tomo I; Pág. 979. 1a. LIV/2016 (10a.). Registro No. 2 011 230.
- Vázquez, Carmen. “Técnica legislativa del feminicidio y sus problemas probatorios”. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*. Núm. 42, dic. 2019, Universidad de Alicante, pp. 193-219. <https://doxa.ua.es/article/view/2019-n42-tecnica-legislativa-del-feminicidio-y-sus-problemas-probatorios> (consultado el 18 de junio de 2020).

Hemerográficas

- Saccomano, Celeste. “El feminicidio en América Latina: ¿Vacío legal o déficit del Estado de Derecho?”. *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, Núm. 117, 2017, pp. 51-78.